

Una Interpretación Política de la Experiencia Autoritaria (1973-1990)

Cristián Gazmuri
Instituto de Historia
Pontificia Universidad Católica de Chile

1. EL GOLPE DE ESTADO DE 1973 Y LA EVOLUCION POSTERIOR DE LA SITUACION

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile tuvo como propósito, según se expresó públicamente, "restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada"¹. Las Fuerzas Armadas declararon que se trataba de salvar la democracia en peligro ante el totalitarismo marxista leninista y poner punto final al caos político y económico en que se debatía el país, lo que no sólo era un mal en sí², sino que, además, debilitaba la seguridad nacional frente a vecinos que se veían como poco amistosos, y en este punto los sucesos de los años siguientes les darían la razón. El propio Pinochet afirmó el día 16 de septiembre "Chile volverá a su tradicional sistema democrático"³. En un comienzo, incluso se informó que gobernarían las Fuerzas Armadas en conjunto, alternándose los Comandantes en Jefe de las distintas ramas a la cabeza del poder ejecutivo: generales Augusto Pinochet (Ejército), Gustavo Leigh (Fuerza Aérea), César Mendoza (Carabineros) y el almirante José T. Merino (Armada). No se mencionó entonces la intención de imponer un proyecto que cambiara fundamentalmente las estructuras socio económicas del país.

Estas primeras declaraciones apuntaban a la idea de un gobierno corto que dejaría el mando en cuanto se dieran las condiciones para retornar al orden constitucional tradicional. Fue así que, frente a la aparente imposibilidad de una salida institucional a la crisis que aquejaba al país desde fines de 1972, muchos chilenos, cansados de la excesiva politización del país y asustados con la magnitud del impasse -incluso quizá la mayoría de los simpatizantes del Partido Demócrata Cristiano- miraron con alivio, aunque sin simpatía, lo sucedido. Reforzaba su confianza en un pronto retorno democrático el hecho de que los militares chilenos no tenían una tradición golpista (aunque habían existido algunos intentos de cuartelazos recientes⁴) y habían gobernado dictatorialmente sólo una vez durante el Chile republicano, entre 1925 y 1932. Otros, observando la radicalización política existente y la dureza de la acción militar represora, pensaron desde un principio en el advenimiento de una dictadura larga. Tenían razón. En octubre de ese año, el discurso de los militares, que al momento del golpe no parecen haber tenido plan de gobierno alguno, ya había cambiado. No se trataba ahora de restaurar el sistema democrático tradicional, sino que éste comenzó a ser considerado como la causa misma de la crisis. Con todo, pocos imaginaban entonces que se iniciaba el gobierno más prolongado y uno de los más innovadores de la historia de Chile republicano. Este, aunque fracasó finalmente en su intento de consagrar en Chile una "democracia protegida" en lo político, sí implantaría en Chile un nuevo orden económico de inspiración neoliberal que ha subsistido hasta la actualidad.

¿Por qué esta evolución? Parece claro que para algunos sectores de militares el discurso inicial no fue más que una táctica. Sin embargo, no todos los militares pensaban de ese modo y existieron otras circunstancias que permiten comprender mejor la enunciada evolución.

¹ Decreto-Ley N° 1, del 11 de septiembre de 1973.

² Ya los gobiernos de Jorge Alessandri, Eduardo Frei y el propio Salvador Allende habían planteado por lo demás la necesidad de fortalecer el poder Ejecutivo frente a un parlamento obstruccionista y otras instancias que dificultaban cualquier acción de gobierno; esta opinión tuvo eco en el mundo castrense.

³ "El Mercurio" 17 de septiembre de 1973, p. 13.

⁴ Cfr.: Carlos Prats G.: *Memorias, testimonio de un Soldado*, Santiago, Pehuén, 1985, parte 2.

En primer lugar, la dinámica del proceso marcó un estilo. El golpe fue un acto de guerra que provocó alrededor de dos mil muertes, condujo al suicidio del Presidente de la República y obligó a exiliarse a decenas de miles de chilenos. No hubiera sido fácil volver rápidamente a un orden democrático en esas condiciones. ¿A que se debió ésta actitud extremadamente violenta en circunstancias que la resistencia fue muy poca? El duro entrenamiento de las Fuerzas Armadas fue en parte responsable, combinado con la intención de inhibir cualquier intento de resistencia armada seria, algo que la propia izquierda había proclamado y parecía en condiciones de ofrecer.

También fue importante la ideología de la "seguridad nacional", auspiciada por el gobierno de Estados Unidos y considerada entonces por los círculos castrenses del continente como "único bastión teórico confiable en la lucha contra el marxismo"⁵. Era preciso salvar el "alma nacional", el conjunto de valores que constituían el ser de Chile. Las declaraciones del General Gustavo Leigh y del Almirante José Toribio Merino (miembros ambos de la Junta de Gobierno) desde los primeros días, fueron muy claras al respecto. Esta misión requería tiempo, todo el que fuese necesario.

Hay que tener en cuenta la cultura y status social de los militares chilenos. Su cultura, de tradición prusiana en el Ejército y británica en la Armada, era la de jerarquía y orden, todo lo contrario de lo que había mostrado el Chile de la última década. Además, reclutadas entre la clase media, las Fuerzas Armadas chilenas tenían un fuerte resentimiento contra el mundo de la elite civil y política en especial, la que por décadas había mantenido hacia ellas y sus valores una actitud irónicamente desinteresada⁶, la que se expresó en la progresiva disminución de los presupuestos militares, particularmente durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva⁷. La revancha contra los políticos, a los que se reprochaba, no sin razón, el haber contribuido a precipitar la crisis, se transformó en un ataque contra el sistema democrático mismo.

Las actitudes de la derecha chilena y el centro demócratacristiano también incidieron en la consolidación autoritaria.

La derecha tradicional había visto sus ideas e intereses cuestionados y perjudicados durante los gobiernos de los Presidentes Frei y Allende, hasta el punto de temer sobre su existencia como clase y eso no lo perdonaba. Ahora quería terminar definitivamente con las utopías igualizantes que, en sus versiones comunitaria y socialista, la habían amenazado: y consecuentemente apoyaban la idea de una dictadura militar larga. La Democracia Cristiana en tanto, con la que algunos militares habían simpatizado hasta el gobierno de Frei, aparecía a sus ojos como utilizándolos. Induciéndolos primero al golpe de Estado y luego retirándoles su apoyo para quedarse finalmente con el poder⁸. La simpleza del raciocinio, ampliamente difundido por los asesores civiles de derecha, no le quitaba fuerza.

Pero la nueva orientación que caracterizó al segundo momento del gobierno militar obedeció, fundamentalmente, a que tomaron importancia dentro de éste, grupos de derecha renovada. Esta estaba representada, en lo político, por elementos nacionalistas, como el hábil abogado Pablo Rodríguez Grez, pero principalmente por el "Gremialismo" y los llamados "Chicago Boys".

El "Gremialismo", originalmente fue un grupo de jóvenes de derecha formados en la Universidad Católica de Chile (UC) y dirigidos por el entonces estudiante Jaime Guzmán, un conservador devoto y crítico de la democracia liberal. Bajo el discurso del apoliticismo, sostuvieron en un comienzo ideas próximas al franquismo de la primera época, para ir derivando, después de 1973, hacia la idea de una "democracia protegida". Serían el núcleo político pensante del régimen militar y estarían tras la Constitución de 1980⁹.

⁵ Cfr. Joseph Comblin "La doctrina de la seguridad nacional" en *Dos ensayos sobre seguridad nacional*, Santiago, Arzobispado de Santiago-Vicaría de la Solidaridad, 1979, pp. 13-205.

⁶ Sobre la actitud de la Democracia Cristiana frente a las Fuerzas Armadas ver: Andrea Ruiz-Esquide: *Las Fuerzas Armadas durante los gobiernos de Eduardo Frei y Salvador Allende*, documento de trabajo, CED, Stgo. 1993.

⁷ Arturo Valenzuela: *El quiebre de la democracia en Chile*, Santiago, Ed. FLACSO, 1989, p. 78

⁸ Augusto Pinochet Ugarte: *Camino recorrido*, Santiago, Ed. Zig-Zag, 1991, T. 2, p. 23.

⁹ Sobre el gremialismo ver: Andrea Guzmán, *El movimiento estudiantil de reforma y el Gremialismo en la época de la Reforma Universitaria (1959-1967)*, Tesis de Grado, Instituto de Historia UC, Stgo., 1990.

El segundo grupo de derecha que terminó de consolidarse durante el gobierno de la Unidad Popular, aunque ya existía previamente, fue un núcleo de economistas, el de los llamados "Chicago Boys". También nacido entre alumnos de la Universidad Católica, en este caso de la Escuela de Economía, durante la década de 1960 hicieron post grados en la Universidad de Chicago¹⁰, pasando luego a ocupar cargos como docentes en el Instituto de Economía de la UC y a asesorar a grandes empresas en algunos casos. Los Chicago Boys se habían transformado en seguidores estrechos de Milton Friedman y Arnold Harberger. Ellos serían quienes aportarían el modelo económico neoliberal al gobierno de Pinochet.

En síntesis, el proyecto histórico de esta nueva derecha se fundaba, en la combinación de un autoritarismo político, una economía liberal, una sociedad jerarquizada y una cultura conservadora.

Resulta natural que esta derecha renovada se alineara con los militares desde el primer momento; se necesitaban mutuamente: los militares pondrían la autoridad y el orden, los políticos y técnicos de derecha el proyecto histórico.

El viraje que transformó el gobierno militar de ser una instancia transitoria a una de carácter fundacional en torno a la figura de Augusto Pinochet, tuvo su consagración jurídica el 4 de diciembre de 1974 cuando el Decreto-Ley N° 788 confirió a la Junta de Gobierno la potestad de modificar a su arbitrio y retroactivamente la carta fundamental de 1925. Pero ya antes Pinochet había logrado convertirse en el hombre fuerte alrededor del cual giraría la nueva institucionalidad. El 26 de junio de 1974 (Decreto-Ley No 527), Pinochet pasaba a ser cabeza del Ejecutivo con el título de Jefe Supremo de la Nación. En diciembre del mismo año se cambiaría la denominación de su cargo por la tradicional de Presidente de la República. Por su parte la Junta de Gobierno asumiría las funciones de Poder Legislativo y Constituyente.

Pinochet gobernaría por casi una década sin oposición popular importante. Esto fue resultado de una combinación entre dura represión política, éxito económico, apoyo político de la derecha y su capacidad de mantener el control de las Fuerzas Armadas. Es así que en Chile a diferencia de otros casos de regímenes militares en Latinoamérica, pese a la presencia importante de personal de las Fuerzas Armadas en el gobierno, se daría más la dictadura de un hombre que la de una institución.

2. EL INTENTO DE CONSOLIDACION DE UN PROYECTO AUTORITARIO NEOLIBERAL

La nueva línea adoptada por el régimen militar se manifestó en la fijación de metas sin plazos.

La nueva orientación había quedado esbozada en lo doctrinario ya el 11 de marzo de 1974, cuando el general Pinochet leyó ante el país dos documentos: la "Declaración de Principios" que echaba las bases de una nueva institucionalidad y el "Objetivo Nacional" que delineaba un plan económico.

El primer documento rescataba el principio de autoridad como fundamento de las sociedades política y civil. las medidas de excepción tomadas durante los primeros días fueron perpetuadas mediante una legislación ad hoc. En lo fundamental: suspensión de la institucionalidad política consagrada en la Constitución de 1925, intervención y control de la prensa y las universidades, estado de sitio, toque de queda, persecución de los funcionarios del régimen de la Unidad Popular, prohibición de cualquier manifestación social, prohibición de la actividad sindical, mantención del exilio. Se trataba de imponer una pedagogía autoritaria a los chilenos destinada a cambiar su cultura política democrática y deshacer a los partidos políticos de centro y de izquierda.

¹⁰ Sobre los Chicago Boys ver: Sofía Correa: "Algunos antecedentes históricos del proyecto neoliberal en Chile (1955-1958)" en *Opciones* N° 6, mayo-agosto de 1985. También: Juan Gabriel Valdés: *La Escuela de Chicago, operación Chile*, Buenos Aires, Eds. Grupo Z, 1989.

El segundo documento apuntaba hacia el modelo liberal auspiciado por los economistas del grupo de los "Chicago Boys". Estos, apoyados por la Armada de Chile, tuvieron poder dentro del régimen desde el momento del golpe de Estado, pero no ingresarían al gabinete ministerial hasta julio de 1974 con Jorge Cauas. El control del grupo sobre el aparato económico se hizo absoluto el año siguiente, cuando su figura más representativa, Sergio De Castro, fue nombrado Ministro de Economía. En diciembre de 1976, De Castro reemplazaría a Cauas en Hacienda, el ministerio clave del sector económico. Tras los "Chicago Boys" estaban sectores de empresarios jóvenes¹¹ que habían consolidado "grupos económicos" durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, actuando con una audacia y usando técnicas de administración de empresas desconocidas previamente en Chile.

Los "Gremialistas", entre los cuales se reclutó la segunda generación de "Chicago Boys" liderada por Miguel Kast terminando con sus vagas aspiraciones económicas corporativistas, pasaron a apoyar firmemente el ordenamiento liberal, ayudando a imponerlo como proyecto económico oficial después de 1975. Ese año los Chicago Boys, monetaristas y partidarios de la libertad absoluta de mercado, impusieron una política de "shock" destinada a la reconversión privatizadora de la economía chilena. Convencidos de que su carácter progresivamente estatizante, que se arrastraba desde la crisis mundial de 1929 pero que había tomado gran impulso durante los gobiernos de Frei y Allende, era la causa estructural de sus crisis recurrentes y su incapacidad para enfrentar el desarrollo que demandaba el país, decidieron alterarla drásticamente.

El tiempo transcurrido ha mostrado que el diagnóstico de los "Chicago Boys" era el elemento teórico más serio del proyecto histórico que se estaba configurando y sería en definitiva -en la forma de la economía liberal que se ha consolidado después de la transición a la democracia- la gran herencia del régimen militar. Como dice el historiador británico Alan Angell, significaba que: "la reducción del sector público, reduciría la base de las presiones sectoriales o populares por concesiones gubernamentales; la reorientación de los excedentes hacia el mercado de capitales robustecería el respaldo a las políticas militares y castigaría a las fuerzas que se le opusieran. la apertura de la economía al libre mercado proporcionaría los medios para crecer, sin que hiciera falta apoyo estatal a sectores no competitivos, (y) permitir que el nivel de sueldos fuera regulado por las fuerzas del mercado debilitaría el poder de negociación política del movimiento sindical. Todos estos elementos se combinarían para eliminar uno de los mayores propagadores de la intranquilidad social: la inflación. (...) Al mismo tiempo se erosionarían las antiguas formas de lealtad política y se desarrollarían otras nuevas, nacionales y sin distinción de clases"¹².

Se imponía así el modelo de liberalismo económico y autoritarismo político. Esta era una combinación que fue presentada como necesaria, insistiéndose que sin el autoritarismo militar el experimento neoliberal -que significaba una verdadera revolución- no hubiera podido llevarse a cabo. En la nueva configuración que tomaba el régimen, aunque los militares seguían teniendo un rol muy importante¹³ ("entre 1973 y 1986, fueron militares 56 de los 118 individuos que ocuparon carteras ministeriales"¹⁴) serían los mencionados asesores y tecnócratas civiles quienes realmente gobernarían, entregando las directrices de largo plazo. Conseguir la legitimidad y continuidad mínima para imponer su proyecto obligaba al régimen a "perder la relación primaria con el poder que lo originó"¹⁵, intentar una desvinculación entre gobierno y Fuerzas Armadas, pero no en términos absolutos. El elemento militar serviría a Pinochet para mantener el "control de la situación contingente" y su presencia en cargos públicos conseguía, al mismo tiempo, que los militares siguieran fieles al que consideraban "su" gobierno. La implementación de la relación gobierno-Fuerzas Armadas fue uno de los mayores rasgos de habilidad de Pinochet. Su régimen fue un autoritarismo basado en una alianza militar-tecnocrática"¹⁶.

¹¹ No así otros grandes empresarios tradicionales que se opusieron a un neoliberalismo que significaba levantar las protecciones aduaneras que favorecían a la industria chilena.

¹² Alan Angell, *Chile de Alessandri a Pinochet. En busca de la utopía*, Santiago, Ed. Andrés Bello-CERC, 1993, pp. 98-99.

¹³ Carlos Huneeus y Jorge Olave: "La participación de los militares en los nuevos autoritarismos. Chile en una perspectiva comparada", en *Opciones* N° 11 mayo-agosto de 1987 pp. 119-162 y Carlos Huneeus: "El ejército y la política en el Chile de Pinochet. su magnitud y alcances", en *Opciones* N° 14, mayo-agosto de 1988, pp. 89-136.

¹⁴ Arturo Valenzuela: "Los militares en el poder, la consolidación del poder unipersonal" en: *El difícil camino hacia la democracia en Chile*, Santiago, Ed. FLACSO, 1993, p. 85.

¹⁵ Augusto Varas, *Los militares en el poder*, Santiago, Pehuén-Flacso, 1987, p. 51.

¹⁶ Oscar Godoy, "Algunas claves de la transición política en Chile" en *Estudios Públicos*, N° 38, otoño de 1990, p. 144.

La combinación se ha justificado aduciendo que en el corto tiempo el modelo neoliberal exigía un "costo social" muy alto. Para disciplinar a los sectores afectados, se contaba con los mecanismos de la dictadura. En primer lugar, control de la información y censura a los medios de comunicación. Esto obedecía al propósito de reducir todo lo posible la conciencia crítica de los chilenos. Además, se intentó que muchos caracteres propios de la mentalidad militar fueran asimilados por la población: "la educación autoritaria, el acatamiento irreflexivo y sin oposición de normas arbitrarias, la sumisión, el temor al cambio"¹⁷.

El instrumento fundamental para mantener el control social y político del país durante los primeros años, fue la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). La DINA fue una policía secreta con facultades casi ilimitadas. Dirigida por un colaborador estrecho de Pinochet, el entonces coronel Manuel Contreras Sepúlveda, inició sus acciones en diciembre de 1973; pero se creó formalmente por el decreto-ley No 217, que contenía disposiciones secretas donde se establecían algunas de sus atribuciones, el cual fue firmado por los cuatro integrantes de la Junta Militar de Gobierno en junio de 1974. Su acción se orientó a detectar, detener sin juicio y, en algunos casos, eliminar, tanto dentro como fuera de Chile, a los enemigos del gobierno militar y extender un severo control sobre la vida de los chilenos. La actitud por lo general obsecuente del Poder Judicial chileno ante el régimen facilitó considerablemente la acción de la DINA.

3. EL MUNDO POLITICO DE OPOSICION: REPRESION Y EXILIO

El golpe de estado fue recibido con estupor y rechazo por la sociedad internacional. Existía una imagen idealizada de la Unidad Popular y el Presidente Allende. El "modelo chileno" representaba la esperanza del advenimiento del socialismo por vía pacífica. Por otra parte, la dureza del golpe, la posterior represión, exilio masivo y dictadura en un país que parecía un ejemplo de democracia tercermundista provocaron la protesta mundial. Las sociedades democráticas occidentales fueron tan críticas frente a lo ocurrido como los socialismos reales (excepción hecha de China)¹⁸.

En el interior del país, después de unos tres o cuatro días en que hubo focos de resistencia armada aislados, las fuerzas paramilitares de la ex Unidad Popular se desintegraron y varios miles de dirigentes y simples partidarios fueron tomados prisioneros, huyeron del país o se refugiaron en embajadas (alrededor de 9.000). El total de exiliados políticos fue, probablemente, de unos 30.000¹⁹. En los meses y años siguientes este éxodo continuó y no sólo por motivos políticos. Muchos perdieron sus trabajos y la crisis económica de 1975, producto del "shock" de los "Chicago Boys" (con una baja del PNB de un 12.9 por ciento y la cesantía encumbrándose por sobre el 17 por ciento) precipitó el exilio económico.

Sólo el MIR continuó ofreciendo resistencia militar después de las dos primeras semanas. Era un grupo pequeño pero organizado para la clandestinidad, que fue ferozmente perseguido por la DINA y los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. El golpe de gracia se le dio en octubre de 1974, cuando su directiva fue eliminada en el ataque a su sede clandestina. En los meses siguientes la eliminación sistemática continuó. En febrero de 1975 el MIR prácticamente había dejado de existir como fuerza operativa, aunque años después se reorganizaría precariamente.

Hacia fines de 1975 -estando semi disuelto el Partido Socialista- la DINA y demás organismos represivos del régimen, se preocuparon del Partido Comunista, siendo eliminados sucesivamente dos de sus comités centrales durante el año 1976. Las acciones de la DINA culminarían en septiembre de 1976 con el asesinato del ex canciller del gobierno de la Unidad Popular, Orlando Letelier, en Washington.

El Partido Demócrata Cristiano, después de unos meses de observación e incluso una cierta colaboración de hecho con el nuevo gobierno por parte de algunos de sus militantes, ante la consolidación del autoritarismo, los

¹⁷ María Dolores Souza y Germán Silva, *Auge y Ocaso de Augusto Pinochet*, Santiago, Ediciones del Ornitorrinco, 1988, p. 8.

¹⁸ Sobre las relaciones internacionales del Gobierno militar chileno, ver: Joaquín Fermandois: *Chile y el mundo 1970-1973*, Santiago, Eds, Universidad Católica de Chile, 1985.

¹⁹ Angell, Alan, *Chile de Alessandri a Pinochet*, p. 136. la cifra es la que entregó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

métodos represivos y la persecución en su contra por parte del gobierno militar, se alineó en la oposición. Su estrategia política fue "procurar el entendimiento de las fuerzas políticas y sociales democráticas con las Fuerzas Armadas, para la restitución de la democracia", debiendo mantener frente al régimen una "independencia crítica y activa"²⁰. Su actitud fue rechazada por el gobierno militar y atacada duramente por la prensa de derecha como ambigua. Finalmente en marzo de 1977 (DL. 1697) el PDC fue disuelto, sus bienes fueron confiscados, sus medios de comunicación silenciados y algunos de sus dirigentes relegados y después exiliados. Desde entonces y hasta comienzos de la década de 1980, al igual que los técnicos, políticos e intelectuales de izquierda que permanecieron en Chile, los demócratacristianos, perseguidos laboralmente y denigrados por la prensa oficialista y de derecha, se refugiaron en las ONG (Organizaciones No Gubernamentales), centros de investigación y estudio financiados con dinero de fundaciones internacionales.

El sector que pudo oponer más resistencia al autoritarismo fue la Iglesia Católica, que encabezada por el Cardenal Raúl Silva Henríquez, Arzobispo de Santiago, opuso a la violencia imperante un mensaje y una práctica de reconciliación. En octubre de 1973 auspició la creación del Comité Pro Paz, que reunía altos signatarios de varias iglesias y que se dedicó a otorgar defensa a los perseguidos políticos y trabajadores despedidos. En noviembre de 1975, el general Pinochet solicitó perentoriamente la disolución del Comité. El cardenal Silva consintió en su término; pero decidió crear otra institución: la Vicaría de la Solidaridad. La Vicaría se transformó en el refugio y defensa de los perseguidos políticos y la única institución que se atrevió a enfrentar a la DINA y abogar abierta y claramente contra la violación de los derechos humanos.

Cuando se creyó que la situación estaba consolidada, el gobierno llevó adelante el primero de varios intentos de fijar un calendario de institucionalización de su proyecto autoritario-neoliberal. El 9 de julio de 1977, en una ceremonia realizada en el cerro Chacarillas, Pinochet fijó metas y plazos para una futura transición a la democracia bajo conducción militar. Los anuncios consolidaban institucionalmente el modelo, el que -sin embargo- incorporaba características políticas al menos semi democráticas. Representaba un triunfo, dentro del gobierno, del sector "Gremialista" y una derrota del sector opuesto a todo intento de retorno a una administración civil y una apertura política.

4. LA COYUNTURA DE 1978

El panorama parecía aclararse para el gobierno de Pinochet. Pero durante 1978 una serie de nubarrones oscurecerían este horizonte de triunfo y alterarían ese calendario. El asesinato planificado por la DINA del ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, el 21 de septiembre de 1976 en Washington, provocó profundos efectos.

El gobierno de Estados Unidos no toleró un acto de esta naturaleza. Tras prolijas investigaciones llevadas a cabo por el fiscal Eugene Popper, quien reunió pruebas fehacientes de que el crimen había sido llevado a cabo por la DINA, se pidió la extradición de los responsables materiales e intelectuales, incluyendo a Contreras y al sub director de la institución, el entonces coronel Pedro Espinoza²¹. Ante la gravedad de la situación, que despertó rechazo dentro de las propias Fuerzas Armadas, Pinochet se decidió a disolver la DINA y Contreras fue relevado de sus funciones en agosto de 1977, ascendiéndole sin embargo, poco después, a general. La DINA fue reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI).

El gobierno decidió presentar el caso como un eslabón más de una campaña internacional contra el país. En enero de 1978 se llamó a una "consulta nacional" realizada sin registros electorales y estado de sitio, para mostrar al mundo que pese a la agresión extranjera el pueblo chileno apoyaba a Pinochet, quien la ganó por un 75 por ciento del total de los votos emitidos según el resultado oficial.

²⁰ Carta de Patricio Aylwin (presidente del PDC) a Renán Fuentealba, *El Mercurio*, 14 de sept. de 1975, cit. por Eugenio Ortega: *Historia de una alianza política*, tesis de licenciatura, UC. de Chile, mayo de 1992.

²¹ Sobre el asesinato de Letelier ver: *Laberinto*, escrito por el propio fiscal Popper y Eugene Branch, Ed. Pensamiento, Stgo. 1984. La versión original, *Labyrinth*, fue publicada en EE.UU. por Viking Press en 1982.

Con todo, el llamado Caso Letelier continuó su curso. Fue así que después de un feroz forcejeo diplomático, el 8 de abril de 1978 el gobierno optó por entregar a EE.UU. el asesino material de Letelier, el norteamericano Michael Townley. A los pocos días, el general Contreras pasaba a retiro.

Pero el coletazo político mayor de la expulsión de Townley y todo el caso Letelier fue la materialización de una primera limitada apertura política real de la rígida dictadura chilena. El 11 de Marzo de 1978 se levantaba el estado de sitio, que duraba desde el 11 de septiembre de 1973, aunque continuaba un "estado de excepción" que era sólo levemente menos restrictivo. Pocos días después fue reemplazado a la cabeza del Ministerio del Interior el general Raúl Benavides, cercano a Contreras, por el civil Sergio Fernández, cercano al Gremialismo. Se abrió paso una hegemonía civil más acentuada. Finalmente, para evitar futuras acciones judiciales contra responsables de violaciones a los derechos humanos, el gobierno decidió dictar una ley de amnistía para los delitos cometidos desde septiembre de 1973 hasta la fecha.

En otra perspectiva, la consulta del 4 de enero también había perseguido subsanar graves discrepancias que se habían producido al interior de las Fuerzas Armadas. El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh, estaba descontento desde hacía varios años. Sus razones eran diversas e iban desde las de tipo personal hasta la objeción del hecho de que habiendo el régimen prometido originalmente un rápido tránsito hacia la democracia, se estaba en un lento camino hacia una institucionalidad política (en el mejor de los casos) semi democrática. Después de la "consulta", a cuya convocatoria se había opuesto Leigh, creyéndose fortalecido por la caída de Contreras, persistió sin embargo en su actitud crítica del rumbo que llevaba la institucionalización²². la pugna estuvo al borde de ser resuelta por las armas. Sólo en último momento la FACH, que apoyaba institucionalmente a su Comandante, sin haber conseguido solidaridad entre las demás ramas de las Fuerzas Armadas, decidió no ofrecer resistencia. El 24 de julio de ese año 1978, Leigh y la totalidad del cuerpo de generales, con dos excepciones, pasaron a retiro²³. El general Fernando Matthei (una de las excepciones) fue nombrado Comandante en Jefe de la FACH por el gobierno. Después explicaría su actitud en virtud de la situación internacional del momento.

Efectivamente, la situación internacional de Chile en ese año de 1978, iba a ser escenario de la segunda y más grave crisis cuasi bélica acaecida en los años del gobierno militar en Chile. La primera se había presentado con el Perú en 1974 y obedeció a la voluntad de los militares gobernantes en ese país de aprovechar el aislamiento internacional de Chile y los problemas existentes entre éste y Bolivia, para hacer realidad sus viejas reivindicaciones sobre la provincia fronteriza de Tarapacá. Perú además estaba muy bien armado merced a ventajosas compras en la Unión Soviética. Pero el régimen militar peruano se desistió en último momento. La nueva crisis, desencadenada en los últimos meses del año 1978 y ahora con Argentina, consecuencia de la interpretación de un fallo en materia de fronteras, sería más grave. Se estuvo al borde de un conflicto armado mayor. La guerra se evitó por la presión norteamericana y la acción mediadora del Vaticano. Se ha dicho, con justicia, que el gobierno chileno (el propio Pinochet y su nuevo Canciller Hernán Cubillos, otro civil) manejó bien esta crisis, aunque se debe tener en cuenta que toda la situación posiblemente no se habría producido de no haber existido gobiernos militares a uno y otro lado de los Andes.

5. BOOM ECONOMICO E INSTITUCIONALIZACION

Sin embargo, al comenzar el segundo semestre de 1978 y pese a la tensión con Argentina, la serie de tormentas parecía superada y la situación de nuevo estable. Tras el apoyo recibido en la "consulta", desprendido de Leigh y Contreras, con ley de amnistía y firme de nuevo en el poder con el apoyo fiel de la derecha, Pinochet se decidió a actualizar el calendario de institucionalización anunciado en el cerro Chacarillas.

²² Que manifestó explícitamente en una entrevista que le hiciera el periódico italiano *Il Corriere della Sera* y que apareció publicada el 18 de julio de 1978.

²³ Para conocer el caso Leigh, en versión de un cercano colaborador de Pinochet, ver: Sergio Fernández, *Mi lucha por la democracia*, Santiago, Ed. Los Andes, 1994, pp. 37-42.

El desprestigio y destitución de Contreras había significado otra considerable pérdida de poder del sector más autoritario y antidemocrático (los "duros") entre los partidarios y colaboradores cercanos de la dictadura militar. En cambio, en la alianza Gremialista-Chicago Boys, ahora, con Sergio Fernández y Hernán Cubillos firmemente a cargo no sólo de la economía sino también del equipo político de gobierno, se había ido abriendo paso la idea (sostenida por Milton Friedman) de que un acentuado liberalismo económico requería como correlato al menos un cierto grado de liberalismo político. La evolución democrática de España después de la muerte de Franco también fue importante. El hecho fue que poco a poco se abandonó la idea de perpetuar institucionalmente como gobierno una forma regulada de autoritarismo; se pensaba ahora en una "democracia protegida" a materializarse después de un largo período de despolitización de la sociedad chilena. La diferencia entre ambas concepciones de gobierno, que en un comienzo fue de matices, se fue ampliando. Se contemplaba, en cualquier caso, un plazo de transición largo, el que no sólo tendría un función pedagógica en lo político, como se dijo más atrás, sino que se consideraba necesario además para asentar en la conciencia de los chilenos el modelo económico neo liberal -que comenzaba a dar resultado pero cuya consolidación tomaría algunos años- sin peligro de ser dislocado por la protesta social.

De todos modos, era necesario apresurar la concreción de un itinerario de avance hacia la consolidación del neoliberalismo económico y una institucionalidad política que consagrara la democracia protegida.

En relación a lo primero, en el mensaje anual a la nación de ese año 1978, Pinochet anunció nuevos importantes pasos a dar en el programa económico social del gobierno que resumió en "siete modernizaciones" claves, todas en consonancia con el proyecto neoliberal. Estas se llevarían a cabo los años siguientes. Un nuevo Código del Trabajo (Plan laboral) fue dictado; una reforma que entregaba el sistema provisional a empresas privadas (AFP) también comenzó a ser estudiada aunque se implementaría después de 1980²⁴; lo mismo ocurrió parcialmente con la salud pública (ISAPRES); se decretó la libertad de tarifas profesionales; los controles sobre la producción de cepas vitivinícolas fueron levantados; más importante, una nueva legislación sobre concesiones mineras, que daba amplias garantías al capital extranjero, fue creada y una reducción generalizada del rol del estado en la política social se llevó adelante. Se trabajó además en desburocratizar el estado y agilizar la administración de justicia. En fin, por consejo del profesor Arnold Harberger, se eliminaron las trabas al crecimiento urbano y se dictó un estatuto automotor que permitió importar piezas y vehículos usados. Después se implementaría la libertad de recorridos y tarifas de la locomoción colectiva particular, en tanto se reducía la inversión pública en infraestructura.

La Corporación de Fomento, (CORFO) tradicional e importante institución estatal creada en la década de 1930 y destinada a promover el desarrollo industrial, se lanzó en otra nueva campaña de ventas de empresas estatales a precios de subasta. Era la segunda ola neoliberal y la implantación en profundidad del modelo.

En relación a la consolidación institucional, en tanto, se decidió preparar una Constitución que consagrara la "democracia protegida". Una comisión encabezada por Enrique Ortúzar venía trabajando al respecto. Bajo el empuje de los Gremialistas y del ministro del Interior Sergio Fernández, se aceleró la redacción de un borrador constitucional.

Conocido un primer borrador constitucional restaba saber cuál sería su mecanismo de legitimación. Sobre este punto, el general Pinochet propuso el siguiente procedimiento: el proyecto constitucional de la Comisión Ortúzar pasaría por el Consejo de Estado. Cumplida esa etapa, el texto resultante sería plebiscitario. Promulgada la nueva constitución se entraría en una "transición" de seis años, con un parlamento designado por el gobierno. Las primeras elecciones políticas tendrían lugar no antes de" 1985. No se establecían plazo para ese itinerario. Sin embargo, el Consejo de Estado" a instancias del ex presidente Jorge Alessandri, introdujo modificaciones al texto de la comisión Ortúzar, las cuales no concordaban con el punto de vista del Jefe del Estado.

²⁴ Cfr. José Piñera, *El cascabel al gato*, Santiago, Zig-Zag, 1991, passim. Esta reforma representó uno de los logros modernizantes hasta el momento verdaderamente exitosos del gobierno de Pinochet; logrado no sin oposición, incluso de la propias Fuerzas Armadas y que vino a solucionar el más grave problema burocrático propio del Chile anterior a 1973

En esas circunstancias, otro grupo de juristas, bajo la dirección del Ministro del Interior Sergio Fernández, fue llamado para que intentara una nueva versión del texto constitucional. Pinochet gobernaría -sin parlamento y con facultades dictatoriales- hasta 1989. En 1988 un plebiscito decidiría si Pinochet (u otro candidato de] gobierno) continuaría como Presidente, ahora con parlamento elegido parcialmente, hasta el año 1997. Sólo entonces se realizaría la primera elección presidencial; competitiva. En caso de perder el candidato gubernamental el plebiscito de 1988 habría elecciones abiertas y competitivas en 1989 que fue en definitiva lo que ocurrió.

Los economistas de gobierno anunciaban un próximo boom que presumían aseguraría su triunfo en el plebiscito que había de llamarse en 1980 para la aprobación del texto constitucional y los artículos que regulaban la transición. El crecimiento del PIB fue de un 8.3 por ciento en 1979. El déficit fiscal se eliminó, la inflación cedió.

La Constitución de 1980, en su versión original, consagraba una institucionalidad que en su estructura definitiva (a regir después de 1989 o 1997 dependiendo del resultado del plebiscito de 1988) se acercaba a ser democrática en muchas de sus instituciones, pero al mismo tiempo se desvinculaba a esta forma de gobierno en lo que verdaderamente era su esencia: la libertad de optar y transar entre grupos diversos. Los mecanismos e instituciones claves que consagraba estaban destinados a que el verdadero poder político siguiera en manos de las Fuerzas Armadas y los sectores más conservadores de la vida nacional, impidiendo el acceso al poder de grupos que amenazarán sus intereses; en particular al crear un Senado "designado" en proporción muy amplia, un consejo de Seguridad Nacional con mayoría militar y consagrar la imposibilidad del Presidente de la República de remover a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. También hacía casi imposible todo cambio de su texto²⁵.

6. HACIA UNA OPOSICION RENOVADA

Pero ¿qué había sucedido con la oposición durante todos estos años y sucesos? ¿Cómo sobrevivieron estos sectores entre los años 1974 y 1980?. Veamos primero la suerte de los partidos y grupos políticos que habían pertenecido a la Unidad Popular²⁶ o le eran afines.

La mayoría de los dirigentes del PS que no habían caído presos o habían muerto en los primeros días lograron pasar al exilio (entre ellos su secretario general Carlos Altamirano). Unos cuantos lograron permanecer ocultos dentro de Chile. En ambos sectores, después de los primeros meses (o años) de shock traumático y cuando los jefes tomados prisioneros en los primeros días fueron siendo liberados y exiliados, se reanudó la lucha sorda entre facciones que había caracterizado su accionar durante la época del gobierno de Allende. Se reflexionaba sobre las causas de la "derrota" y al hacerlo se entraba en un espiral de recriminaciones mutuas y rupturas en cadena que alcanzó niveles agudos.

El exilio provocó que la cúpula dirigente socialista se dividiera en el hecho. El grupo que permaneció dentro de Chile ("Secretariado Interior"), logró publicar en marzo de 1974 un documento ("Documento de marzo") en que planteó que la derrota de septiembre de 1973 se debió a la incapacidad del régimen UP de "articular y combinar el ejercicio de todas las formas de poder"²⁷. El enfoque marxista leninista se mantenía.

Posteriormente, los socialistas dentro de Chile realizaron tres plenos hasta el año 1979 en el que se dividieron. La estrategia seguida durante estos años -y en especial a partir de 1977- fue la de buscar una "unidad frente a la dictadura" que comprendiera a la Democracia Cristiana y a la Iglesia Católica, pero siempre en la línea de una superación final de la "democracia formal".

²⁵ Sobre la gestación de la Constitución de 1980, ver: Fernández: *op. cit.*, pp. 122-167 (cap. IV)

²⁶ Sobre la Unidad Popular y sus partidos durante las décadas de 1970 y 1980 ver: Carlos Bascañan E. *La Izquierda sin Allende*, Santiago, Ed. Planeta, 1990; además: Mireya Dávila A.: *Historia de las Ideas de la renovación socialista*, tesis de licenciatura, Instituto de Historia Universidad Católica de Chile, Stgo. 1994, inédito.

²⁷ "Documento de Marzo" en: *Historia documental del PSCH 1933-1993, signos de Identidad*, Concepción, IELCO/Archivo Salvador Allende, 1993, p. 200.

Pero el "Secretariado Interior" no tenía fuerza real. Más importante era el accionar del PS en el exterior ("Secretariado Exterior"). Este, bajo la dirección de Carlos Altamirano, se radicó en Berlín y realizó los llamados plenos de la Habana en 1975 y el de Argel (el que en realidad se llevó a efecto en Berlín), en 1978. En este último Altamirano realizó un profundo viraje sobre los que habían sido sus postulados durante la época de la UP y posiblemente hasta cerca de 1977 a juzgar por las opiniones que da en su libro *Dialéctica de una derrota*, aparecido en México en ese año²⁸. La democracia liberal estaba siendo revaluada, más adelante pasaría algo relativamente similar con la propiedad privada y un liberalismo económico moderado. Ahora Altamirano -que había vivido la experiencia en Alemania del Este de contemplar de cerca un "socialismo real"- sostenía que: "los elementos de formalismo que caracterizan a la limitada democracia burguesa, no invalidan el concepto mismo de democracia"²⁹. Viniendo de quien venían, esas palabras constituían un cambio gigantesco; se trataba de un lenguaje "de renovación". Planteaba también la necesidad de una convergencia con el PDC³⁰.

El problema de fondo que quedaba planteado a raíz del viraje de Altamirano y los socialistas externos era el de la existencia misma de la Unidad Popular. Todo cambiaba con la nueva lectura ideológico-política del Pleno de Argel. Pero la Dirección Interior no estaba dispuesta a ir tan lejos. La apoyaba además, desde el exterior, quien se perfilaba ya desde 1974, como el gran rival de Altamirano, Clodomiro Almeyda, una figura grata a los comunistas. Estos, por su parte, buscaban constituirse en la fuerza hegemónica dentro de la Unidad Popular³¹.

El hecho es que en su congreso de 1979 la "Sección Interna", descontenta con el nuevo rumbo del Secretariado Exterior después del pleno de Argel, reemplazó como secretario general del partido a Carlos Altamirano. Este respondió con otro congreso, reunido ahora en París (conocido entre los socialistas de hoy como el XXIV Congreso) el que desconoció los acuerdos del congreso interno de 1979, acusando a su vez a Almeyda de intentar "imponer una ortodoxia presuntamente marxista-leninista trasnochada y anti histórica, contraria a la actual tendencia del movimiento revolucionario mundial, por su carácter antidemocrático"³². Entonces Altamirano fue expulsado por el "Secretariado Interno". Las posiciones se habían invertido, los radicalizados eran ahora los "internos" y los moderados los "externos".

Pero, desde nuestro punto de vista, lo que nos interesa es destacar que el proyecto histórico que caracterizó a la Unidad Popular se desintegró. Y que este cambio, después de 1988, tendría consecuencias para la historia de Chile casi tan importantes como la consolidación del proyecto económico social del régimen militar y la derecha. Las nuevas circunstancias harían posible, la alianza política del PS con la Democracia Cristiana, el triunfo presidencial de la Concertación en 1989 y el retorno de Chile a la democracia política.

El hecho es que en 1979 ya no había UP. Existía un PS renovado dirigido todavía por Altamirano y otro, cercano al PC, con más militancia dentro de Chile.

La historia de la evolución del Partido Comunista durante estos años es bastante más sencilla. Con un Moscú todavía como Meca del Comunismo mundial, su proyecto histórico continuó siendo el marxismo leninismo de tipo soviético.

Para el PC, la principal causa del fracaso de la UP fue la no obtención del poder total debido a la acción del imperialismo y lo que su Secretario General, Luis Corvalán llamó "dos tipos de errores: unos de derecha y otros de izquierda, que en buena medida se entrelazaban"³³. Vale decir, no haber sido más duros con la contra revolución y, al mismo tiempo, con el infantilismo de izquierda (MIR y el PS dirigido por el Altamirano de la época).

²⁸ Carlos Altamirano: *Dialéctica de una derrota*, México, 1977.

²⁹ Carlos Altamirano *Informe al Pleno Extraordinario del Partido Socialista de Chile*, abril de 1978 (fotocopia) p. 2.

³⁰ *Ibid.* p. 23.

³¹ Entrevista a Pedro Vuskovic en *Chile-América*, Roma, N^{os} 54-55 junio-julio de 1979, p. 119.

³² Entrevista a Carlos Altamirano en *Chile-América* N^{os} 54-55, p.134.

³³ Informe de Luis Corvalán al Pleno de 1977.

Pese a la represión inicial el PC conservó en el Chile post golpe una estructura política. La Comisión Política se había "autocongelado" en 1973. Pero una vez eliminado el MIR, como vimos, se transformó en el blanco privilegiado de la DINA y otros grupos represivos del régimen militar. Con todo, aún así, logró mantener una estructura unitaria.

Sobre la base de la caracterización del régimen de Pinochet como fascista, el PC mantuvo hasta 1979 una estrategia -remontable hasta el VII Congreso de la Komintern de 1935- destinada a constituir una alianza táctica con todas las fuerzas sociales antifascistas, incluyendo religiosos, comerciantes, industriales no fascistas, las propias Fuerzas Armadas y desde luego los partidos de clase media. Su trabajo había de ser fundamentalmente de concientización, oponiéndose a cualquier acción armada, la que se pensaba que sólo serviría para consolidar al bloque militar-derechista gobernante. Después del quiebre de Partido Socialista y su parcial "renovación", durante los años 1979-1980, el PC cambió de táctica. En las nuevas circunstancias, la anterior parecía inviable. Por otra parte, sectores importantes de su militancia juvenil, como protesta por lo que consideraban una postura blanda del PC hacia la dictadura, habían estado emigrando hacia lo que quedaba del MIR que intentaba renacer por esos años. Además, la aprobación de la Constitución de 1980, que significaba la voluntad de Pinochet de permanecer en el poder por mucho tiempo más, obligaba a repensar la táctica sostenida, hasta entonces.

El 4 de septiembre de 1980 Luis Corvalán, en un discurso pronunciado en Moscú, diseñó una nueva estrategia. Ahora se optaba por la oposición armada a la dictadura. La nueva línea los acercaba al MIR y al sector radicalizado del PS, llevando posteriormente a la formación del "Frente Patriótico Manuel Rodríguez".

De esta manera, 1980 se transformó en un año clave en la evolución de la izquierda marxista chilena. Un sector socialista (dirigido "por quien era tradicionalmente el líder más radical: Carlos Altamirano.) tuvo una renovación socialdemócrata. Otro sector se alineó con un Partido Comunista que estaba dispuesto a entrar a luchar contra el régimen militar por la vía armada.

Las nuevas circunstancias significaban, repitámoslo, la desaparición de la Unidad Popular y con ella de uno de los tres proyectos históricos que se habían disputado la conducción de la historia de Chile desde 1958.

La Democracia Cristiana, en clara oposición al régimen militar desde fines de 1973, guardaba un perfil bajo y hasta la "consulta" de 1978, pareció conservar la esperanza de una salida pactada y pacífica, en un plazo breve. La "consulta" y los sucesos de 1978 la desengañaron. Parecía muy debilitada: un aparato partidista semi tolerado por el régimen, apoyado por algunos grupos de estudio, que - sobrevivía precariamente. La figura y prestigio del ex Presidente Eduardo Frei era su principal capital político, el que le permitía mantener el apoyo de un segmento significativo de la opinión pública de oposición.

La Democracia Cristiana conservaba su unidad. Habían sectores que divergían dentro de la DC, pero nada parecido al panorama de desintegración del PS y los demás partidos de la ex Unidad Popular, excluyendo (relativamente) al Comunista. De hecho, uno de los grandes fracasos políticos del gobierno militar y en particular del Gremialismo fue el no lograr arrebatarle, de modo definitivo, su base de clase media a la Democracia Cristiana.

Movimiento sindical contrario al régimen, o simplemente independiente, no existió prácticamente durante estos primeros años, excepto algunos sindicatos de la gran minería del cobre. Las organizaciones sindicales que existían o se atrevían a manifestarse eran cúpulas manejadas desde el gobierno. Las estudiantiles eran nominadas por las rectorías de las diversas universidades intervenidas y eran incondicionales al régimen militar. Grupos aislados fueron creando sin embargo una cultura juvenil de rechazo a la realidad existente.

7. CONSOLIDACION INSTITUCIONAL Y CRISIS DEL NEOLIBERALISMO ECONOMICO

En el mes de agosto de 1980 Pinochet llamó a plebiscitar el texto constitucional redactado por la comisión Fernández en el plazo de un mes. Con derecho, por primera vez desde 1973, a expresar públicamente su pensamiento

y disponiendo de un limitado acceso a la prensa, la oposición política fue sorprendida en desconcierto, aun cuando, por iniciativa principalmente demócrata cristiana, ya estaba funcionando una comisión constitucional paralela a la oficial, el llamado "Grupo de los 24", constituido en julio de 1978.

A pesar de la disparidad de medios y de lo limitada que fuera la sorpresivo apertura política, la campaña por el plebiscito fue reñida y apasionada. La oposición, en el dilema de participar en éste legitimándolo, o negarse a hacerlo, entregándole una victoria aplastante y sin oposición a Pinochet, optó por la primera posibilidad.

Triunfó el "Sí" por un 67,04 por ciento contra un 30,19 por ciento de los votos, más blancos y nulos. La votación se hizo nuevamente sin registros electorales. Pero al igual que en la consulta de 1978, según la opinión de los analistas, sin duda la opción por el "Sí" realmente recibió una mayoría de preferencias, aunque fuese probablemente en un porcentaje menor que el anunciado por el Ministerio del Interior.

Poco después del plebiscito el Presidente de la Democracia Cristiana, Andrés Zaldivar, fue exiliado. Al año siguiente, en enero de 1982, moría Eduardo Frei con lo cual el principal partido de oposición quedaba golpeado tan duramente que muchos creían en la imposibilidad de su recuperación, al menos por largo tiempo. Sin embargo, hacia fines de ese mismo año se imponía dentro del PDC -con Gabriel Valdés a la cabeza- la corriente que propiciaba un franco acercamiento con la izquierda renovada, abriéndose una estrategia que finalmente llevaría hacia el retorno de la democracia en Chile en lo que Valdés llamó "un gran movimiento nacional" de recuperación democrática³⁴. A nivel supra partidario se creaba además, en noviembre de 1982, el Proyecto de Desarrollo para un Consenso Nacional (PRODEN), que reunía figuras de diferentes orígenes políticos actuando en forma independiente, inclusive varios personeros de derecha. En cierta medida, todas estas iniciativas fueron consecuencia del renacimiento de la actividad política que se produjo transitoriamente con motivo del plebiscito de 1980.

Entretanto la consolidación post plebiscito del régimen de Pinochet, celebrada con el retorno del gobierno al tradicional palacio de los presidentes de Chile "La Moneda", destruido en el golpe del 11 de septiembre de 1973 y ahora reconstruido, sería efímera. la economía chilena, que aparentemente pasaba por su mejor hora, vino a experimentar súbitos y graves problemas a fines de 1981 los que se transformaron en debacle el año siguiente. El modelo socio económico neoliberal parecía haber llegado a una crisis terminal.

Una serie de errores macroeconómicos del equipo capitaneado por De Castro, al perpetuar³⁵ la mantención artificial de un precio bajo del dólar, sumados a la recesión mundial que se produjo ese año, llevó a una cadena de quiebras que comenzaron por algunas de las industrias más grandes del país y culminaron con las de algunos de los mayores bancos particulares. El pasivo de todo el sistema bancario, descontando capital y reservas, superaba los seis mil millones de dólares de la época. La cesantía se disparó hasta más de un 20 por ciento nominal y un porcentaje real bastante más alto (quizás hasta un 30 por ciento). El PIB que había venido subiendo desde 1976 cayó en un 14,1 por ciento en 1982 y otro 0 " 7 por ciento en 1983. El Estado tuvo que socorrer con miles de millones de dólares al aparato financiero en quiebra. Era el fin del boom y naturalmente esto tendría sus consecuencias política³⁶

Pero la magnitud de la crisis y sus efectos sociales provocaron que los trabajadores del cobre, que ya habían manifestado algún malestar laboral los años anteriores llamaran a un paro y "protesta" contra el gobierno³⁷. Se trataba de una acción originalmente muy limitada, pero sus efectos fueron sorprendentes, no sólo protestaron los mineros en una acción que duró sólo un día (11 de mayo de 1983), sino que se acoplaron espontáneamente sectores amplios de la sociedad civil.

En el mismo país que en 1980 había entregado un aparente amplísimo apoyo a Pinochet, la ola de "protestas" cundió incontenible. Estas "protestas" periódicas abarcaron un período de más de dos años. las primeras se dieron sólo en Santiago, pero después se extendieron por todo el país.

³⁴ *La Segunda*, 24 de diciembre de 1982, p. 3.

³⁵ No existe, hasta el día de hoy, una opinión concordante de los economistas al respecto.

³⁶ Para la crisis de 1982 ver: Pilar Vergara, *Auge y caída del neoliberalismo en Chile*, Santiago, FLACSO, 1984.

³⁷ Sobre la gestación de la primera "protesta", ver: *Chile de Alessandri a Pinochet...*, op.cit., pp. 119-123.

La sociedad civil y el mundo político se reactivaron a través de las "protestas" iniciadas en 1983. Aunque convocadas por sindicatos y después organizaciones políticas y civiles, fueron, en lo esencial, reacciones sociales espontáneas, aunque ciertamente estaban relacionadas con la deblace económica de 1982 que proseguía. También fue importante el hecho de que la crisis permitió el renacimiento de un auténtico movimiento estudiantil. Frente a las organizaciones designadas surgieron federaciones de alumnos universitarios y secundarios en abierta rebeldía ante el régimen.

El colapso económico de 1982 no sólo fue fundamental en el nacimiento de las "protestas", favoreció asimismo la nueva estrategia subversiva del PC ("Frente Patriótico Manuel Rodríguez") el renacido MIR y el "MAPU Lautaro". Estos, en lo que tenían propiamente de lucha guerrillera, nunca llegaron a representar un peligro para la solidez del régimen militar; pero realizaron una serie de acciones espectaculares que culminarían en el intento de asesinato de Pinochet en 1986 y una internación masiva de armas en la playa de Carrizal Bajo, a unos setecientos kilómetros al norte de Santiago.

La nueva situación significó también la pérdida de protagonismo de la Iglesia Católica como defensora de los derechos humanos. Ahora desempeñaría otro rol, el de mediadora entre el gobierno y una oposición que parecía consolidarse. Esto se explica por el cambio en las condiciones objetivas y, en menor medida, porque buscando la reconciliación nacional, al llegar la edad de jubilación del Cardenal Raúl Silva Henríquez, el Vaticano decidió nombrar como Arzobispo de Santiago, el puesto de más representatividad del clero chileno, a un hombre de acuerdos. El futuro Cardenal Juan Francisco Fresno.

La tardía respuesta política del gobierno militar ante las protestas, que en 1983 parecían incontenibles, fue nombrar en el Ministerio del Interior a Sergio Onofre Jarpa. Su tarea era negociar con la oposición "democrática". Con Jarpa la antigua clase política volvía al Palacio de la Moneda³⁸.

Naturalmente el nombramiento de Jarpa como Ministro del Interior, aunque abría una esperanza, no significaba la solución inmediata para el problema de las "protestas" y una posible apertura democrática. Además, estaba por verse cuanto podía influir Jarpa en la voluntad de Pinochet.

En tanto, la oposición formal, los partidos políticos, lanzaron la estrategia de la "movilización social". No cabía otra actitud que encauzar la situación; las "protestas" deberían culminar en un desplome del régimen. Se formó asimismo un "Comando Nacional de Trabajadores", destinado a coordinar la acción sindical y laboral a nivel nacional en el mismo sentido.

También comenzaron los esfuerzos de los partidos de oposición por unirse. La clave era conseguir un acuerdo formal entre el Partido Socialista "renovado" y la Democracia Cristiana. A este acuerdo se esperaba que se integraran los demás partidos de la ex UP, excepto el Comunista. Entonces se podría entrar a negociar con el gobierno militar y saber a que atenerse. Ya en febrero de 1983 se habían reunido una serie de personalidades de los partidos Radical, Demócrata Cristiano, Socialista, e incluso algunos antiguos conservadores y liberales, redactando un "Manifiesto Democrático". Un llamado "que serviría de germen" a los posteriores acuerdos que se lograrían los años siguientes entre los sectores políticos democráticos chilenos³⁹.

Finalmente los partidos de la oposición constituyeron la Alianza Democrática (AD) y "pidieron la renuncia de Pinochet, la elección de una asamblea constituyente y un pacto social amplio que supervigilara el retorno a la democracia"⁴⁰. Se trataba de una ingenuidad; el régimen sabía de sobra que tenía todavía suficientes recursos para mantenerse en el poder, aunque se fuese pagando progresivamente un precio político más alto.

³⁸ Para la versión de Pinochet sobre el diálogo de 1983 cfr. *Camino recorrido*, t.3, v.1, Caps. IV, V

³⁹ Ascanio Cavallo et al., *La historia oculta del régimen militar*, Santiago, Ed. la Epoca, 1989, p. 305 Para conocer el texto completo del "Manifiesto Democrático" cfr.: Gabriel Valdés, *Por la libertad*, Santiago, 1986, pp. 315-322

⁴⁰ Alan Angell, *Chile de Alessandri a...* op. cit., p 122

La Alianza Democrática no fue el único conglomerado político formado ese año de 1983. El Partido Comunista y la fracción Almeydista del socialismo hicieron su propio pacto; formaron el Movimiento Democrático Popular (MDP) que estaba por una política de movilización de masas y confrontación, en la cual la punta de lanza había de ser el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El PC, para contrariedad de la Alianza Democrática, se negó explícitamente a renunciar al uso de la violencia en contra del régimen militar durante la etapa de negociación que parecía aproximarse.

La formación de ambos pactos constituía un avance enorme para la oposición al gobierno de Pinochet. Había renacido la vida política activa en Chile.

8. NUEVA RECUPERACION DEL GOBIERNO MILITAR

Sin embargo, al comenzar el año 1985, las "protestas", que continuaban realizándose periódicamente, comenzaron a ser reprimidas aún más duramente. El gobierno había declarado el estado de sitio nuevamente en noviembre de 1984 y Jarpa fue reemplazado por un hombre de perfil político bajo, quedando como verdadero artífice de la política oficial el Secretario General de Gobierno, el joven abogado Francisco Javier Cuadra. Por otra parte, cada vez parecía más claro que, de no poder darse otro paso adelante en la resistencia civil, las "protestas" estaban agotando sus posibilidades en cuanto instrumento para debilitar y eventualmente acabar con el régimen. Peor todavía, entre los sectores medios y con ayuda de la propaganda gubernativa, hacían resurgir el fantasma de la anarquía de 1973.

Lo que logró todo este episodio (1983-85) de desafío a la autoridad de Pinochet fue, en lo concreto, que se autorizara un pequeño espacio de libertad de prensa y el retorno de una cantidad, también pequeña, pero creciente, de exiliados. Pero también lograron mostrar definitivamente a la derecha que el autoritarismo no podía ser una solución de carácter permanente. Si más adelante el plebiscito de 1988 se llevó adelante en forma correcta y se respetó su resultado, fue en buena medida consecuencia de las protestas de 1983-85 que pusieron en evidencia que el régimen no podía seguir prescindiendo absolutamente de la voluntad de un sector posiblemente mayoritario ya por entonces en el país.

Aprovechando el nuevo ánimo creado a raíz de las protestas, el Cardenal Fresno y sus consejeros vieron la posibilidad de incorporar a la Alianza Democrática sectores que habiendo estado con el régimen fuesen partidarios de su apertura política en términos más amplios que los consagrados en la Constitución de 1980. "El cardenal Fresno solicitó a tres personas que redactaran un proyecto de Acuerdo Nacional de Transición a la Democracia: Fernando Leniz, empresario y uno de los primeros ministros de Economía de Pinochet; José Zavala, presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos; y Sergio Molina, ex ministro del gobierno de Frei"⁴¹. Era una forma de crear o, mejor dicho, fortalecer, una derecha democrática a partir del Movimiento de Unión Nacional (MUN) que algunos conservadores relevantes habían creado durante el crucial año de 1983; entre ellos el ex senador conservador Francisco Bulnes y el futuro presidente del Partido Renovación Nacional después de 1992, el entonces muy joven Andrés Allamand.

¿Qué movió a esos hombres de derecha que habían colaborado abiertamente con el gobierno militar a sumarse al "Acuerdo"?, posiblemente la evidencia de que sumido el país en la crisis económica sería difícil para el régimen cumplir con su itinerario de 16 años a partir de 1981 y que el cambio hacia la democracia vendría en 1989 y no en 1987. De allí la necesidad de buscar una "solución pactada" al estilo español. En algunos de ellos también pesó, sin duda, la evidencia que la democracia protegida o autoritaria no era ya necesaria ante la nueva fisonomía de la oposición socialista. En las nuevas circunstancias la institucionalidad política autoritaria podía ser transada, a cambio de la continuidad de la economía neoliberal.

Por cierto que la intención de formar el Acuerdo Nacional, incluyendo en éste a la derecha del MUN, apuntaba a crear un interlocutor que tuviese la fuerza necesaria para ser escuchado por Pinochet.

⁴¹ Ibid. p. 123

Tras difíciles negociaciones, de las cuales sólo se excluyó al MDP que no estaba dispuesto a renunciar a la vía armada, el "Acuerdo Nacional" se firmó en agosto de 1985. La clave de su concreción - insistimos- fueron las seguridades que los demócrata cristianos y algunos socialistas dieron a los empresarios y políticos de derecha, de que el tránsito hacia la democracia que se proponía no pretendía una revolución socialista, ni siquiera se eliminaría el sistema neoliberal como base económica de la sociedad chilena, a pesar de que en el texto se mencionaba una "economía mixta". Esa opción se respetaría luego de la elección del Presidente Patricio Aylwin en 1989.

Pero el gobierno militar ignoró el Acuerdo Nacional y parte de la derecha también, en particular la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido político que nació de la estructuración política formal, el año 1984, del "Gremialismo".

Por otra parte, la economía comenzaba a recuperarse bajo la conducción de Hernán Büchi, un economista neoliberal menos dogmático que De Castro o Cauas. Büchi, sacando lecciones del fracaso de éstos, logró que, a partir de 1985, los índices macroeconómicos, en especial el de crecimiento del producto nacional, subieran apreciablemente (en promedio 5 por ciento entre 1985 y 1988 inclusives). Bajó además la cesantía y la inflación y nuevamente pudo hablarse del éxito del "modelo". Esta evolución ha sido calificada como "desde el neo liberalismo radical al neoliberalismo pragmático"⁴².

Fue así que hacia comienzos de 1986 el régimen militar había superado la crisis y las nuevas circunstancias fortalecieron en éste la confianza en ganar el plebiscito de 1988.

9. HACIA EL PLEBISCITO DE 1988

Sin embargo, repuesta parcialmente de los golpes que significaron el fin de las protestas, del aprovechamiento publicitario gubernativo del frustrado atentado contra Pinochet y del episodio de las armas de Carrizal, en la evidencia que el itinerario de la Constitución de 1980 finalmente se cumpliría; el presidente del PDC, Gabriel Valdés, decidió iniciar los contactos para organizar (con sus aliados de la Alianza Democrática y el Acuerdo Nacional) una coalición de gobierno con miras a ganar el plebiscito de 1988 y las elecciones presidenciales del año siguiente.

Con todo, la oposición no estaba todavía decidida a participar en el plebiscito a ser llamado en 1988, posiblemente temiendo una situación como las de los años 1978 y 1980. Finalmente, la Democracia Cristiana tomó la decisión de participar en el plebiscito en las condiciones en que estaba planteado y en el convencimiento de que la oposición podía ganarlo en caso de ser correcto; se trataba de una apuesta muy arriesgada. Decisión que se tornó firme cuando en agosto de ese mismo año 1987, Patricio Aylwin, portavoz de la tesis por la participación en el plebiscito de 1988, fue elegido Presidente del Partido Demócrata Cristiano procediéndose a la inscripción legal del partido en el Registro Electoral. Así gobierno y oposición fueron al plebiscito en el convencimiento de que lo ganarían.

La izquierda renovada tomó la misma actitud, en un postrer rechazo a la estrategia militar del Partido Comunista, el que sin claudicar ante el fracaso de Carrizal, insistía en negarse al camino electoral "dentro" de la institucionalidad. la mayoría de los grupos menores de izquierda procedieron también, en los meses siguientes, a apoyar la inscripción, formándose el 2 de febrero de 1988 la "Concertación" por el "No" conglomerado que reunía a 16 partidos o grupos políticos y que con algunas variables se prolongaría como base política de los gobiernos de Patricio Aylwin y de Eduardo Frei Ruiz-Tagle⁴³. El esquema de los tres tercios se había quebrado, aunque mediante el mecanismo de alianza de dos de ellos, algo que ya había sucedido en la elección de Eduardo Frei Montalva en 1964 y de nuevo durante el gobierno de la Unidad Popular entre 1970-73, cuando se habían aliado el centro y la derecha, aunque de manera transitoria. Ahora lo harían el centro y la mayor parte de la izquierda y con carácter duradero.

⁴² Eduardo Silva: "La política económica del régimen chileno durante la transición" en: Drake, Paul y Iván Jacksic, *El difícil camino a la democracia*, Santiago, FLACSO, 1992, pp. 193-241.

⁴³ Ortega: *op. cit.*: pp 284-302.

La Concertación llamó a toda la oposición a inscribirse en los registros electorales. El nacimiento, en torno a la figura del socialista Ricardo Lagos, de un partido político "instrumental" (que luego se convertiría en permanente) el Partido Por la Democracia (PPD), al cual se integraron incluso figuras de derecha, consolidó la opción de participar en el plebiscito de 1988 ya tomada por el PDC y el PS renovado. Finalmente, también en febrero del año 1988, el propio MDP (excepción hecha del Partido Comunista⁴⁴) también se avino a participar en el plebiscito.

Ante el desafío, Pinochet hizo retornar a Sergio Fernández al Ministerio del Interior. El hombre del plebiscito de 1980 era colocado nuevamente en calidad de estrategia para ganar éste de octubre de 1988, a cuyo objeto debía coordinar todo el aparato del estado. Pero las circunstancias eran muy diferentes; el Chile de 1980 estaba en pleno boom económico y el recuerdo de la anarquía de 1972-73 estaba aún fresco. No habían ocurrido el desplome de la economía de 1982, ni las protestas, y la opinión pública tenía mucho menos conocimiento de las violaciones masivas a los derechos humanos ocurridas durante los primeros años de la dictadura. Ahora existía además una pequeña derecha democrática y una limitada prensa de oposición.

En agosto de 1988, los comandantes de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas, vale decir el poder legislativo, eligieron al general Pinochet como candidato a la Presidencia de la República para el plebiscito a realizarse. Frente a su nombre la ciudadanía debía pronunciarse por el "Sí" o por el "No". Se levantaron los estados de excepción.

El plebiscito del 5 de octubre de 1988 se llevó a cabo correctamente. Incluso la oposición tuvo un limitado pero decisivo acceso a la televisión durante las semanas previas⁴⁵. El recuento de los votos, hecho sobre la base de registros electorales correctos, fue limpio.

Finalmente, después de varias horas se dio a conocer el resultado. El "No" había triunfado por un 54,71% de los votos sobre un 43,01, por el "Sí", con una participación ciudadana altísima, un 92 por ciento de los inscritos. Habría elecciones competitivas y libres en 1989. El régimen militar se extinguía y se abría un proceso de democratización.

10. RETORNO A LA DEMOCRACIA POLITICA Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA ECONOMICO NEOLIBERAL

Para participar en las elecciones presidenciales competitivas de 1989 la oposición exigió una serie de reformas que democratizaran la Constitución de 1980 y en la derecha, por su parte, se fue asentando progresivamente la idea de que la mejor forma de consolidar el sistema económico neoliberal era en un contexto genuinamente democrático.

Las reformas constitucionales exigidas por la oposición para participar en elecciones presidenciales competitivas en 1989, negociadas por un nuevo Ministro del Interior, el economista Carlos Cáceres, aumentaban la cantidad de civiles en el Consejo de Seguridad Nacional y el número de senadores elegidos por voto popular, impedían suspender el derecho de Habeas Corpus durante los estados de excepción, facilitaban los mecanismos para reformar la Constitución y se acortaba el plazo del primer período presidencial (de transición) a cuatro años en lugar de los ocho que fijaba la "carta fundamental del 1980 en su versión original. Con todo aún quedaban mecanismos y enclaves autoritarios, y las Fuerzas Armadas conservaban un estatuto privilegiado. Las reformas a la Constitución del "80" se aprobaron en un nuevo plebiscito de consenso el 30 de julio de 1989. También se producía un acuerdo entre el régimen saliente y el entrante para nombrar miembros del directorio del Banco Central, entidad que, en la nueva institucionalidad era prácticamente autónoma y tenía amplísimos poderes económicos.

Chile tendría pues liberalismo económico y liberalismo político, atemperado el primero por la sensibilidad social de la coalición que ganaría las elecciones presidenciales de 1989 (la "Concertación" por el "No" que pervivió después del plebiscito), y limitado el segundo por los resabios autoritarios que aún después de las reformas quedaron en el texto de 1980.

⁴⁴ La base comunista finalmente también votaría, al menos parcialmente, en el plebiscito.

⁴⁵ Sobre la preponderancia de la propaganda política oficialista en favor del "Sí" ver: Carlos Huneeus: "La derrota del general Pinochet. El plebiscito del 5 de octubre de 1988 en Chile", en revista *Opciones* N° 15, enero-abril 1989, p. 162 y 164

A los sectores de gobierno les costó elegir un candidato a Presidente de la República. Dentro del oficialismo muchos porfiaban porque fuera Pinochet, pero eso significaba intentar una carta ya jugada y perdida; peor todavía, significaba su renuncia a la Comandancia en Jefe del Ejército, y conceder el general donde estaba la base de su poder, así como que venían tiempos complejos, se negó. Por lo demás, era difícil pretender que quien gobernara Chile como autócrata pudiera hacerlo ahora dentro del respeto a las reglas de la democracia. Paradojalmente, su permanencia en la Comandancia en Jefe de Ejército daría estabilidad a la transición, pues impidió acciones espontáneas de mandos medios (a lo Tejero en España o los "Carapintadas" en Argentina) durante el gobierno de Patricio Aylwin. Así, aunque a veces hostil y desafiante, Pinochet respetó e hizo respetar, entre 1990 y 1994, la institucionalidad que él mismo había creado. ¿Quién podía ser candidato del régimen militar entonces? Finalmente, se optó por el técnico que salvó el neoliberalismo, el ministro Hernán Büchi. Este no era un político, no le gustaba la política y si aceptó fue bajo fuerte presión de la UDI -con la cual se identificaba relativamente- y del propio gobierno.

El candidato de la oposición a la elecciones presidenciales fue Patricio Aylwin, el Presidente del Partido Demócrata Cristiano. La elección del Aylwin -que al principio despertaba reticencias, pues se pensaba en una figura más joven- fue un acierto. Lejos de ser una personalidad espectacular y brillante (como el dirigente socialista Ricardo Lagos) era (y es) un político moderado de larga carrera y experiencia. Había sido tenaz opositor a Allende, pero después también un activo enemigo de la dictadura, siendo, de hecho, el generalísimo de la campaña por el "No" desde su cargo de presidente del PDC en el plebiscito de 1988. Ponderado, estudioso, cauto y astuto, católico observante; entregando una imagen de seguridad y orden, Aylwin mostró como candidato lo mejor que había caracterizado a la clase política chilena antes de su debacle de 1970-73.

Sorpresivamente surgió un tercer candidato -que le quitaría muchos votos a Büchi y pocos a Aylwin- Francisco Javier Errázuriz. Su discurso, deshilvanado y populista, fue, en lo fundamental, anti gubernamental.

La elección presidencial de diciembre de 1989 dio los siguientes resultados: Aylwin 55 por ciento; Büchi 29 por ciento y Errázuriz 15 por ciento.

Sintetizando el significado del desenlace del régimen de Pinochet, el economista Juan Andrés Fontaine señalaba: "El plan político del gobierno militar funcionó al fin, pero, irónicamente, lo hizo para beneficio de los partidos opositores"⁴⁶. Pero también es efectivo que los opositores habían aceptado el modelo neoliberal y gobernar con una democracia que todavía no era plena. En esta combinación, si técnicamente los economistas de gobierno se habían mostrado exitosos, los políticos opositores mostraron haber aprendido de sus errores del pasado y actuaron con gran habilidad. Derrotaron en las urnas al régimen de Pinochet por sus graves violaciones a los derechos humanos, así como por el "costo social" de la imposición de la economía neoliberal, pero conservaron lo esencial de su modelo económico cuando éste demostró (en el período Büchi) transformarse en un instrumento de desarrollo eficaz, logrando una revolución en lo económico social.

⁴⁶ Juan Andrés Fontaine, "Transición económica y política en Chile", *Estudios Públicos*, N° 50, Otoño 1993, p. 274.